

CARTA DIRECTOR GENERAL

La guerra de Ucrania ha ocupado nuestra atención durante todo 2022, y como organización humanitaria, Acción contra el Hambre ha estado presente, dentro y fuera de las fronteras del país apoyando a la población. Pero el conflicto ha tenido también impacto en España. Sus efectos se han sentido en el incremento de los precios en los mercados internacionales de materias primas, tanto energéticas como industriales y agrícolas. Todo ello se ha materializado en unas tasas de inflación muy altas, con especial incidencia en los productos de alimentación y en suministros básicos. Impactos que sufre directamente la población y que repercuten en su bienestar.

Esta situación lleva a los hogares con menos recursos a tener, en muchos casos, que elegir entre una alimentación suficiente y adecuada o mantener sus viviendas a la temperatura necesaria. Hogares que, a pesar de haberse reducido la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en 2022, alcanzan al 26% de la población en España¹. La escalada en los precios de alimentación ha afectado duramente a las personas en situación de carencia material y social severa (un 7,7%, esto es 3,65 millones de personas), de las cuales un 5,4% no pudieron permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días.

Los últimos datos relativos a la seguridad alimentaria en España (julio 2020 a julio 2021) nos dicen que un 13,3% de los hogares españoles experimentaban algún nivel de inseguridad alimentaria; esto es casi 2,5 millones de hogares y, por tanto, en torno a 6.235.900 personas.² De estos hogares, el 5,2% sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, es

decir, casi un millón de hogares, que representan un total de 2.438.124 personas, han tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos. Estas cifras nos indican que el problema de los hogares españoles para acceder a alimentos adecuados es estructural y no está únicamente ligado a crisis coyunturales. En Acción contra el Hambre hemos constatado que esta crisis de precios de los alimentos ha sido muy relevante entre las personas que participan en nuestros programas. En este sentido, la encuesta realizada en el marco del estudio “Innovación social en la inserción laboral: promoción de hábitos de vida saludable y su impacto en el empleo” nos muestra que el 53% de las personas participantes en nuestros programas de empleabilidad sufre algún nivel de inseguridad alimentaria, de las cuales, en torno al 10% estarían en una situación de privación alimentaria severa.

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el cumplimiento del derecho a la alimentación en nuestro país³, y la necesidad de impulsar medidas y políticas públicas que nos permitan como país alcanzar los compromisos adquiridos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: “Hambre cero”. El ODS 2 recomienda a los países que hagan seguimiento de la inseguridad alimentaria, algo que, salvo alguna variable a través de la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE, no se está produciendo en España. En respuesta a ello, desde nuestra organización hemos puesto nuestro conocimiento y experiencia en el desarrollo de un sistema de alerta temprana que nos permita detectar el riesgo de inseguridad alimentaria y así anticiparnos para diseñar los programas e intervenciones adecuados. Pondremos este

sistema a disposición de otros agentes y de las instituciones encargadas del diseño de políticas públicas, con el objetivo de contribuir a alcanzar los compromisos del país y mejorar la vida de las personas.

Asimismo, en Acción contra el Hambre apoyamos la idea de que el empleo decente es una herramienta esencial para luchar contra la inseguridad alimentaria y la desigualdad social. La capacitación de las personas para que accedan y se mantengan en el mercado laboral es clave. Ofrecer protección social a las personas más vulnerables será esencial para su integración.

Por ello, durante todo 2022, desde nuestra organización hemos trabajado en estos dos ámbitos: inserción sociolaboral y seguridad alimentaria.

Desde nuestros programas apoyamos a personas en riesgo de exclusión social que están en búsqueda de empleo o que quieren emprender un negocio nuevo. Apoyamos a personas con situaciones y perfiles diferentes a través de programas específicos, destaca que el 70% son mujeres. Además, acompañamos a jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral, con personas migrantes y con personas en situación de desempleo de larga duración. Durante 2022, hemos apoyado a cerca de 6000 personas a encontrar un empleo o a emprender. 1827 personas han encontrado un empleo con nuestro apoyo, superando una ratio media de inserción del 40%. Especialmente relevante ha sido el resultado logrado de inserciones laborales de las personas mas vulnerables en el Programa de Escuelas de Empleo, donde se ha alcanzado un 35%.

El escalado de VIVES EMPLEA SALUDABLE ha sido un hito de 2022, alcanzando a 674 personas y permitiéndonos afianzar este modelo que se constituye en nuestra apuesta por alcanzar un doble impacto en las personas: mejorar su empleabilidad y su salud, uniendo los componentes de inserción laboral y los de alimentación y hábitos de vida saludables. Este año ha supuesto la recuperación de la actividad de emprendimiento, afectada por la crisis de la COVID-19, ya que con nuestro acompañamiento se hayan creado 158 negocios y desarrollado 295 planes de empresa, cifras que duplican las de 2021. Seguimos apostando por la digitalización y modelos de negocio sostenibles mediante el enfoque de circularidad, lo que nos posiciona como una alternativa interesante para la población más joven.

Finalmente, quiero incidir en nuestra disposición para contribuir a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, avanzar en un mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía y disminuir las brechas sociales que dificultan la recuperación y el crecimiento.



OLIVIER LONGUÉ
Director General de
Acción contra el Hambre

¹ Encuesta Condiciones de Vida, abril 2023. Datos referenciados a 2022.

² Moragues-Faus, Ana y Magaña-González, Claudia R. (2022). Alimentando un futuro sostenible: Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la COVID-19. Universidad de Barcelona y Fundación Daniel y Nina Carasso.

³ Recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ratificado por España en 1977.